GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea Legislativa — 4 ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 25

16 de noviembre de 2026

Presentada por el señor *Rivera Schatz*

(Por petición del Partido Demócrata de Puerto Rico,

a través de su Presidente, Luis Dávila Pernas)

Referida a

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

Para solicitar al 120.º Congreso de los Estados Unidos a asumir con carácter prioritario su responsabilidad de atender y resolver de forma definitiva el problema centenario del estatus político de Puerto Rico, conforme a la voluntad democráticamente expresada por el pueblo puertorriqueño; reafirmar el compromiso de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con la búsqueda de una solución justa, democrática y permanente a la condición política de Puerto Rico; instar al 120.º Congreso de los Estados Unidos a atender con prioridad la igualdad de trato a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en los programas de Medicaid, SNAP, SSI y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD); reafirmar la voluntad de esta Asamblea Legislativa de colaborar con el Congreso; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 3 de noviembre de 2026 se celebraron en los Estados Unidos las elecciones de medio término mediante las cuales el electorado estadounidense definió la composición de ambas cámaras del 120.º Congreso, el cual iniciará sus trabajos en enero de 2027.

Las decisiones que adopta el Congreso de los Estados Unidos inciden directamente sobre el bienestar económico, social y fiscal de los más de 3.2 millones de ciudadanos

americanos que residen en Puerto Rico, según el Censo de 2020. Ello es así porque, bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos (Artículo IV, Sección 3), el Congreso ejerce poderes plenarios sobre Puerto Rico. No obstante, nuestros ciudadanos no pueden votar por el Presidente, no tienen representación en el Senado federal y están representados en la Cámara de Representantes federal por un solo Comisionado Residente, quien no tiene derecho al voto en el pleno de dicho cuerpo. Es decir, las leyes que más afectan la vida diaria de nuestro Pueblo se aprueban en un foro en el que este no tiene voz ni voto en igualdad de condiciones.

Puerto Rico pasó a ser un territorio de los Estados Unidos en virtud del Tratado de París de 1898, y la ciudadanía americana se extendió a los nacidos en la Isla a partir de 1917. Más de un siglo después, la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos continúa sin resolverse. Entre 2012 y 2024, los electores de Puerto Rico han participado en cuatro consultas de estatus. En el plebiscito del 5 de noviembre de 2024, de acuerdo con los resultados certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, el 58.43% (614,126 votos) favoreció la estadidad; el 29.38% (308,854 votos), la soberanía en libre asociación; y el 12.19% (128,101 votos), la independencia.

El Congreso ya ha trazado el camino. En diciembre de 2022, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó con apoyo bipartita la Ley de Estatus de Puerto Rico (H.R. 8393), que proponía un plebiscito federal vinculante entre opciones no territoriales. Dicha legislación fue reintroducida en el 118.º Congreso (H.R. 2757 / S. 3231). El Congreso entrante tiene que retomar ese trabajo y resolver, de una vez y por todas, el problema centenario del estatus de Puerto Rico. Esta Asamblea Legislativa entiende que esa oportunidad no debe desaprovecharse.

La desigualdad que nace del estatus territorial se traduce, además, en un trato desigual en los programas federales de los que dependen cientos de miles de familias puertorriqueñas. En el caso de Medicaid, a diferencia de los estados, Puerto Rico recibe una asignación anual con tope bajo la Sección 1108 de la Ley de Seguridad Social y un porcentaje de pareo federal (FMAP) fijado por ley, en lugar de calculado según el ingreso

per cápita. La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 (Ley Pública 117-328) aumentó temporalmente el FMAP de Puerto Rico a 76% y la asignación anual hasta el 30 de septiembre de 2027. En caso de que el Congreso no actúe antes de esa fecha, el FMAP regresaría a 55% y la asignación federal se reduciría drásticamente, lo que pondría en riesgo los servicios de salud de cerca de la mitad de la población de la Isla, que depende de este programa. Puerto Rico no puede continuar enfrentando un "precipicio fiscal" de Medicaid cada pocos años; se requiere una solución permanente y equitativa.

En cuanto a la asistencia nutricional, desde 1982 los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico están excluidos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y, en su lugar, reciben beneficios a través del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), financiado mediante una subvención en bloque con tope fijo. Por su diseño, el PAN no se ajusta automáticamente ante desastres naturales, crisis económicas o aumentos en la necesidad, y ofrece beneficios y límites de elegibilidad menores que los de SNAP.

De igual forma, los residentes de Puerto Rico están excluidos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) desde su creación en 1972. En 2022, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en *United States v. Vaello Madero*, resolvió que corresponde al Congreso decidir si extiende el programa a Puerto Rico. Mientras tanto, las personas de edad avanzada, ciegas o con impedimentos de escasos recursos en la Isla dependen del programa de Ayuda a Personas Mayores, Ciegas e Incapacitadas (AABD), cuyos beneficios son una fracción de los que provee el SSI.

Finalmente, los programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) son esenciales para garantizar vivienda segura, asequible y resiliente en Puerto Rico, incluidos la vivienda pública, la asistencia de alquiler, las subvenciones en bloque para desarrollo comunitario y los fondos de recuperación ante desastres (CDBG-DR y CDBG-MIT) asignados tras los huracanes Irma y María, los terremotos de 2020 y el huracán Fiona. Es indispensable que Puerto Rico reciba un trato equitativo en las fórmulas de asignación de estos programas y un financiamiento estable y predecible.

La entrada del 120.º Congreso representa una nueva oportunidad para atender estos asuntos prioritarios. De conformidad con la voluntad expresada por el pueblo puertorriqueño en las diversas consultas de estatus reclamando la igualdad que provee la unión a la Nación como Estado Federado, esta Asamblea Legislativa le solicita al Congreso entrante que presente la legislación pertinente para hacer valer el mandato de los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Hacer un llamado al 120.º Congreso de los Estados Unidos para que se resuelva, definitivamente, el problema centenario del estatus político de Puerto Rico, mediante la aprobación de legislación que provea al Pueblo de Puerto Rico un proceso de autodeterminación justo, vinculante y definido por el Congreso, tomando como referencia la Ley de Estatus de Puerto Rico aprobada por la Cámara de Representantes en 2022.

Sección 2.- Solicitar al 120.º Congreso de los Estados Unidos que atienda con prioridad la igualdad en el trato a los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en los programas federales, en particular:

a) Medicaid: aprobar, antes del 30 de septiembre de 2027, una solución permanente al financiamiento de Medicaid en Puerto Rico que elimine el tope de la asignación anual y establezca un porcentaje de pareo federal (FMAP) equiparable al de los estados;

b) SNAP: encaminar la transición de Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP);

c) SSI: extender el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico; y

d) HUD: garantizar a Puerto Rico un trato equitativo en las fórmulas de asignación y un financiamiento estable y predecible en los programas de vivienda y desarrollo comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal.

Sección 3.- Reafirmar la voluntad institucional de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de colaborar con el 120.º Congreso de los Estados Unidos en la atención de los asuntos prioritarios para Puerto Rico.

Sección 4.- Copia de esta Resolución Concurrente, en sus versiones en español e inglés, será enviada al liderato de ambas cámaras, a los presidentes de las comisiones y a los presidentes de los caucus congresionales del 120.º Congreso de los Estados Unidos; y al Presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés).

Sección 5.- Esta Resolución Concurrente será aprobada en ambos idiomas oficiales de Puerto Rico -español e inglés-, siendo su versión en inglés la siguiente:

"**CONCURRENT RESOLUTION**

To request that the 120th Congress of the United States undertake, as a matter of priority, its responsibility to address and definitively resolve the century-old issue of Puerto Rico's political status, consistent with the democratically expressed will of the Puerto Rican people; to reaffirm the commitment of the Legislative Assembly of Puerto Rico to pursuing a just, democratic, and permanent solution to Puerto Rico's political

condition; to urge the 120th Congress of the United States to give priority to ensuring equal treatment for United States citizens residing in Puerto Rico under Medicaid, SNAP, SSI, and programs administered by the United States Department of Housing and Urban Development (HUD); to reaffirm the willingness of this Legislative Assembly to collaborate with Congress; and for other related purposes.

STATEMENT OF MOTIVES

On November 3, 2026, midterm elections were held in the United States, in which the American electorate determined the composition of both chambers of the 120th Congress, which shall convene in January 2027.

The decisions of the Congress of the United States directly affect the economic, social, and fiscal well-being of the more than 3.2 million United States citizens residing in Puerto Rico, according to the 2020 Census. This is so because, under the Territorial Clause of the Constitution of the United States (Article IV, Section 3), Congress exercises plenary powers over Puerto Rico. Nevertheless, our citizens cannot vote for President, have no representation in the United States Senate, and are represented in the United States House of Representatives by a single Resident Commissioner, who has no right to vote on the floor of that body. Thus, the laws that most affect the daily lives of our people are enacted in a forum in which they have neither a voice nor a vote on equal terms.

Puerto Rico became a territory of the United States pursuant to the Treaty of Paris of 1898, and United States citizenship was extended to persons born on the Island beginning in 1917. More than a century later, the political relationship between Puerto

Rico and the United States remains unresolved. Between 2012 and 2024, Puerto Rico's voters participated in four political status consultations. In the plebiscite held on November 5, 2024, according to the results certified by the Puerto Rico State Elections Commission, 58.43 percent (614,126 votes) favored statehood; 29.38 percent (308,854 votes), sovereignty in free association; and 12.19 percent (128,101 votes), independence.

Congress has already charted the course. In December 2022, the United States House of Representatives passed, with bipartisan support, the Puerto Rico Status Act (H.R. 8393), which proposed a binding federal plebiscite among nonterritorial options. That legislation was reintroduced in the 118th Congress (H.R. 2757 / S. 3231). The incoming Congress must resume that work and resolve, once and for all, the century-old issue of Puerto Rico's political status. This Legislative Assembly believes that this opportunity must not be squandered.

The inequality arising from territorial status also results in unequal treatment under the federal programs upon which hundreds of thousands of Puerto Rican families depend. In the case of Medicaid, unlike the states, Puerto Rico receives a capped annual allotment under Section 1108 of the Social Security Act and a Federal Medical Assistance Percentage (FMAP) established by statute, rather than calculated on the basis of per capita income. The Consolidated Appropriations Act, 2023 (Public Law 117-328), temporarily increased Puerto Rico's FMAP to 76 percent and increased its annual allotment through September 30, 2027. Should Congress fail to act before that date, the FMAP would revert to 55 percent, and the federal allotment would be drastically

reduced, jeopardizing health care services for nearly half of the Island's population, which depends on this program. Puerto Rico cannot continue to face a Medicaid "fiscal cliff" every few years; a permanent and equitable solution is required.

With respect to nutrition assistance, United States citizens residing in Puerto Rico have been excluded from the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) since 1982 and instead receive benefits through the Nutrition Assistance Program (NAP), which is funded through a capped block grant. By design, NAP does not automatically adjust in response to natural disasters, economic crises, or increased need, and provides lower benefits and eligibility limits than SNAP.

Likewise, residents of Puerto Rico have been excluded from the Supplemental Security Income (SSI) program since its establishment in 1972. In 2022, the Supreme Court of the United States, in *United States v. Vaello Madero*, held that it is for Congress to decide whether to extend the program to Puerto Rico. Meanwhile, low-income elderly persons, persons who are blind, and persons with disabilities on the Island depend on the Aid to the Aged, Blind, or Disabled (AABD) program, whose benefits amount to a fraction of those provided under SSI.

Finally, programs administered by the United States Department of Housing and Urban Development (HUD) are essential to ensuring safe, affordable, and resilient housing in Puerto Rico, including public housing, rental assistance, community development block grants, and disaster recovery funds (CDBG-DR and CDBG-MIT) allocated following Hurricanes Irma and Maria, the 2020 earthquakes, and Hurricane

Fiona. It is imperative that Puerto Rico receive equitable treatment under the allocation formulas for these programs, as well as stable and predictable funding.

The convening of the 120th Congress represents a new opportunity to address these priority matters. Consistent with the will expressed by the Puerto Rican people in the various political status consultations, calling for the equality afforded by admission to the Union as a State, this Legislative Assembly requests that the incoming Congress introduce the appropriate legislation to give effect to the mandate of the 3.2 million United States citizens residing in Puerto Rico.

BE IT RESOLVED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF PUERTO RICO:

Section 1.—To call upon the 120th Congress of the United States to definitively resolve the century-old issue of Puerto Rico's political status through the enactment of legislation providing the people of Puerto Rico with a fair and binding process of self-determination defined by Congress, using as a reference the Puerto Rico Status Act passed by the House of Representatives in 2022.

Section 2.—To request that the 120th Congress of the United States give priority to ensuring equal treatment for the 3.2 million United States citizens residing in Puerto Rico under federal programs, particularly:

(a) Medicaid: enact, before September 30, 2027, a permanent solution to Medicaid funding in Puerto Rico that eliminates the cap on the annual allotment and establishes a Federal Medical Assistance Percentage (FMAP) comparable to that applicable to the states;

(b) SNAP: advance Puerto Rico's transition from the Nutrition Assistance Program (NAP) to the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP);

(c) SSI: extend the Supplemental Security Income (SSI) program to United States citizens residing in Puerto Rico; and

(d) HUD: ensure equitable treatment for Puerto Rico under allocation formulas and stable and predictable funding under the housing and community development programs administered by the United States Department of Housing and Urban Development.

Section 3.—To reaffirm the institutional willingness of the Legislative Assembly of Puerto Rico to collaborate with the 120th Congress of the United States in addressing matters of priority to Puerto Rico.

Section 4.—A copy of this Concurrent Resolution, in both its Spanish and English versions, shall be transmitted to the leadership of both chambers, the committee chairs, and the chairs of the congressional caucuses of the 120th Congress of the United States; and to the Chair of the Democratic National Committee (DNC).

Section 5.— This Concurrent Resolution shall take effect immediately upon its approval."